



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

***DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN***

Puerto Gaitán, quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

TUTELA	2021-00048-00
ACCIONANTE	VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS
ACCIONADA	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Procede el Despacho a emitir decisión en relación con la acción de amparo Constitucional deprecada por el Ciudadano VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS contra la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

I. ANTECEDENTES

1. **PRETENSIÓN:** El señor VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS actuando en nombre propio, solicitó que se le proteja sus derechos fundamentales de PETICIÓN, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, que considera vulnerados por la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por cuanto no ha respondido sus solicitudes.

Aduce que fue desplazado desde el año 2002 en la Ciudad de Magdalena junto con su núcleo familiar y que hasta la fecha no le han resuelto su caso, pese a que presentó la respectiva reclamación. Agrega que ha presentado tres (3) derechos de petición, solicitando información respecto al pago de la indemnización o ayudas humanitarias, sin obtener respuesta veraz.

Finalmente expone no tener recursos económicos, por lo que reitera que se protejan los derechos fundamentales vulnerados, y se ordene a la accionada el reconocimiento de la indemnización.

2. RESPUESTA DE LA ACCIONADA:

La demandada UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, se pronunció a través de su representante, indicando que la acción es improcedente por cuanto a la fecha no existe ninguna solicitud para resolver.

II. COMPETENCIA

Este Despacho Judicial es competente para conocer y fallar la presente Acción de Tutela, de conformidad con lo previsto en el Art. 86 de la Constitución Nacional de 1991, los Decretos 2591 de 1991, 1382 del 2000 y demás Normas complementarias.

III. CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

Conforme a lo consagrado en el artículo 86 Constitucional, toda persona tendrá Acción de Tutela, para reclamar ante los Jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la Acción u Omisión de cualquier Autoridad Pública. El Decreto 2591 de 1991 hizo extensiva esta Acción a los particulares en desarrollo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 86 ya mencionado que dispone, que la ley establecerá los casos en los que la Acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, respecto de los cuáles el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

Es entonces la Acción de Tutela un mecanismo jurídico, sencillo y expedito, dirigido a los Jueces y Magistrados y orientado a obtener el amparo contra los actos que violen, trasgredan o amenacen los Derechos Fundamentales consagrados constitucionalmente. De esto dimana que, en el Estado Constitucional, cuyo fin supremo es la salvaguardia y protección de la vida, la Libertad, la Igualdad y la Dignidad Humana, no se puede concebir que alguno de los Derechos Fundamentales del ser humano se quede sin el amparo Estatal para su ejercicio efectivo y pleno.

Así mismo ha manifestado la Corte que dos características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico Colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez; la primera por cuanto no solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de un instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser de que busque evitar un perjuicio irremediable (Artículo 86, inciso 3 de la constitución).

La segunda, puesto que la acción ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación amenazado.

En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de presiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.

Debido entonces a las especialísimas características de la acción de tutela, es que se impone al juez constitucional hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en cada caso, y para el efecto, cuenta con algunas facultades y deberes, entre los cuales se destaca, el de escudriñar tanto los hechos que puedan configurar una amenaza o vulneración de aquellos derechos, como precisamente todos los que puedan resultar afectados.

1. Problema jurídico.

Se trata de establecer si efectivamente la demandada ha vulnerado los derechos en perjuicio del accionante VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS.

2. Análisis del caso concreto.

En concreto considera el accionante, que se le han desconocido y vulnerado sus derechos, ante la actitud omisiva asumida por la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

De acuerdo con lo anterior, si apreciamos las circunstancias que han rodeado el insuceso que es materia de análisis, dentro del ámbito de lo expuesto por la parte Demandante se debe destacar lo siguiente:

Según lo afirmado por el accionante actualmente existe una solicitud a la que no se le ha brindado respuesta, y por ende solicita se le proteja su derecho fundamental de petición; no obstante, el actor no allegó copia de su radicación o constancia de recibido.

Ahora bien, conforme a la respuesta brindada por la entidad accionada, efectivamente se aprecia que el señor VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS no acreditó haber radicado dicha petición, pues de lo aportado se aprecia que en el año 2019 recibió una respuesta, sin que para esa fecha hubiera presentado alguna inconformidad sobre tal pronunciamiento por parte de la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

Ciertamente la Honorable Corte Constitucional, reiterativamente ha sostenido que la Tutela tiene una connotación de carácter **residual y subsidiaria**, esto es, que solo procede cuando se trata de proteger Derechos Fundamentales en aquellos eventos en los cuales no exista otro medio de Defensa. En el caso materia de examen como anteriormente se mencionó, no puede tener como cimiento un acto negligente, omisivo, ilegal o contraventor de la Ley; es decir, no puede constituirse en patente para reclamar ante la Institución Judicial el reconocimiento de un derecho vulnerado, cuando el accionante no aportó el derecho de petición o solicitud que dice no se resolvió de manera veraz, pues se reitera una vez más, la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, resolvió lo que al parecer fue un derecho de petición de enero de 2019.

En otras palabras, no se puede, como se pretende, amparar los derechos fundamentales enunciados, cuando está demostrado que el accionante pudiendo, no ejerció su derecho de impugnación o cualquier otra manifestación de inconformidad, frente a las respuestas brindadas en el año 2019, que permitiera al despacho verificar vulneración a los otros derechos enunciados por el actor como trasgredidos. Lo anterior precisamente dadas las connotaciones de subsidiaridad de la acción de tutela.

Complementario a lo anterior y en relación con el principio de INMEDIATEZ, tampoco procedería por su extemporaneidad. Nótese como los hechos que suscitaron la supuesta vulneración alegada, ocurrieron aparentemente en el mes de enero del año 2019, es decir hace ya más de dos (2) años, por lo que a juicio del Despacho la acción no se presentó dentro de un término razonable y ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, es decir que se ha impetrado de manera tardía atendiendo lo expresado por nuestro máximo Tribunal Constitucional entre otras decisiones, en la sentencia *T-678-10*

En virtud de esas premisas, se negará consecuentemente la acción de tutela invocada por el aquí accionante VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - DENEGAR la solicitud de amparo impetrada por el señor VICTOR RAFAEL ROBLES DE ARMAS, conforme a lo motivado.

SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese el expediente a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


CESAR AUGUSTO TAMAYO MEDINA
Juez